
Falta un Pacto Político sin Trampas

Fallaron las Instituciones

- ★ Miseria e Injusticia Hicieron Estallar la Violencia
- ★ Tampoco es Solución el Neoliberalismo Autoritario
- ★ Los Legisladores, el Ejemplo Máximo de Inutilidad

LORENZO MEYER

La violencia que acaba de estallar al sur de México como resultado de condiciones de miseria e injusticia extremas, no es el camino para el país, pero tampoco lo es el neoliberalismo autoritario seguido hasta ahora. Se necesita un nuevo pacto político, sin trampas, que responda a las necesidades del México real, no del oficial. Un pacto donde no vuelva a ocurrir que en Chiapas el PRI-gobierno logra 97.7 por ciento de los votos (1976), 90.2 por ciento (1982), 89.9 por ciento (1988)... ¡y una rebelión armada en 1994!

Hoy, como en pocas ocasiones, se ha unido la clase política mexicana, en su sentido amplio: el PRI y el PRD, los obispos y la Secretaría de Gobernación, los líderes empresariales y los formadores de opinión pública. Todos coinciden en proclamar que la violencia política que acaba de estallar en Los Altos de Chiapas no es la respuesta a los viejos y evidentes

problemas de desgobierno e injusticia social extrema que ahí se han acumulado. Los motivos —temores— por los que cada uno de ellos rechaza la violencia son distintos, pero finalmente tienen razón: como proyecto nacional, la declaración de guerra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) al Ejército nacional para derribar al gobierno de Carlos Salinas e introducir la justicia social sustantiva, es inviable y suicida en las circunstancias nacionales e internacionales del mundo pos-soviético.

Ahora bien, no basta condenar la violencia de unos rebeldes a los que les sobran causas profundas y antiguas, también hay que insistir en que la violencia del Estado tampoco es la respuesta adecuada. No necesitamos en 1994 un 1968. Pero hay que llevar el razonamiento más adelante, hasta sus últimas consecuencias. Si la violencia no es el camino, ¿cuál es? Nadie, en completa honestidad, puede sugerir que sea el de las instituciones y el liderazgo político vigentes. Hoy el sistema electoral y de partidos no funciona, y es más motivo de deslegitimidad que de legitimidad; la aberración de Yucatán lo acaba de demostrar con claridad meridiana: el que oficialmente gana pierde y viceversa; son elecciones de Alicia en el País de las Maravillas. Los congresos

locales y nacional son ejemplo máximo de inutilidad política absoluta, total, pues la mayoría de sus integrantes no representan a nadie más que a sí mismo y únicamente ante el Presidente, cuya voluntad es, en realidad, su única razón de ser. Finalmente, el Poder Judicial ni es poder ni está dedicado a la impartición de justicia, sino todo lo contrario; quien en México busca justicia ante el Ministerio Público o ante un tribunal y la encuentra, es más por accidente que por cualquier otra razón.

En tales circunstancias —conocidas de todos, gobernantes y gobernados, y por mucho tiempo—, ¿cómo dar respuesta clara y creíble a la pregunta sobre el camino a seguir para resolver la injusticia sustantiva en que viven los chiapanecos y muchos otros mexicanos en el resto del país? Hay que imaginar y poner rápido en marcha algo nuevo: hay que acabar —aunque sea por conveniencia y no por convicción— con el sistema autoritario vigente, no sólo por ser socialmente injusto en extremo, sino por obsoleto y disfuncional, y sustituirlo por uno moderno, efectivamente representativo, donde los hoy marginados tengan voz y voto efectivos. En suma, hay que hacer lo que se ha anunciado mil veces en el discurso del poder, pero mil veces se ha negado en la práctica: implantar el Estado de Dere-

cho, democrático, justo y que dé a los votos y no a las balas, el papel principal. El problema político de fondo que enfrenta un México pobre y premoderno, pero cuya directiva pretende hacer creer a propios y extraños que ya llegó al Primer Mundo —la petición del gobierno mexicano de ser considerado un igual entre los miembros de la OECD pareciera ser una broma cruel—, se hizo trágicamente evidente hace un cuarto de siglo, en Tlatelolco, pero los intereses creados, de entonces y los de hoy, se han negado a darle solución de fondo. Y el problema se puede resumir así: mientras la sociedad mexicana ha crecido y modificado su naturaleza, el sistema de poder ha permanecido sin cambio desde que cristalizó en los años cuarenta. Es por ello que tanto las instituciones como el equipo que las dirige han sido rebasados por las circunstancias. El resultado es una creciente disfuncionalidad de los procesos políticos. Hoy la cuerda se reventó por lo más delgado: por Chiapas, lugar de pobres entre los pobres.

En el folleto que publicó en 1990 el Consejo Consultivo del Pronasol, se señala que: "Si se elimina del producto de Chiapas la riqueza generada por el petróleo (que no se queda ahí, como tampoco la de las presas hidroeléctricas de Malpaso, Chicoasén, Angostura y Peñitas), su produc-

to interno bruto (PIB) por persona se reduce sustancialmente y ese estado se sitúa dentro de los más pobres del país"; es decir, al lado de Oaxaca y Guerrero. El problema chiapaneco es, como lo señaló el manifiesto del EZLN, centenario. Quien hoy busque adentrarse en él su conocimiento, haría bien en leer el libro de Thomas Benjamin: *A Rich Land, a Poor People: Politics and Society in Modern Chiapas* (Universidad de Nuevo México: 1989). La tesis del prof. Benjamin está en el título mismo de la obra: Chiapas es una tierra rica pero un pueblo pobre, resultado de un proceso político cargado de violencia, en una sociedad de profundas divisiones étnicas y, sobre todo, económicas.

La violencia ha sido un elemento constante en la sociedad chiapaneca, lo fue en el siglo XIX y la Revolución de 1910 tuvo efectos particularmente destructivos en las comunidades indígenas. En efecto, tirios y troyanos —"mapaches" y carrancistas— se cebaron sobre los pueblos indígenas. La posrevolución no significó el fin de la violencia, pues la disputa por la tierra —el centro de la riqueza en toda sociedad rural, como lo es Chiapas— no se solucionó con la reforma agraria, y con el auge ganadero posrevolucionario, se agravó. La "ganaderización" del estado a partir de 1950 fue rápida, tan rápida como la destrucción ecológica. Entre ese año y 1985, la tierra bajo cultivo y la población crecieron al mismo ritmo —se cuadruplicaron—, pero el número de cabezas de ganado aumentó con mayor celeridad: creció siete veces. Como resultado de este proceso, los ganaderos y las comunidades indígenas se encontraron en posiciones opuestas, antagónicas, luchando por el

recurso escaso fundamental: la tierra.

La distribución de la riqueza en Chiapas en la actualidad, dice el profesor Benjamin, no es muy diferente de la que prevalecía al final del porfiriato. El nivel de vida general ha mejorado, pero no el sentido de injusticia profunda e inseguridad de las comunidades en relación al futuro. En 1960, los individuos con propiedades de 1,000 hectáreas o más constituían 2.4 por ciento de los propietarios privados en Chiapas, pero controlaban 60 por ciento de la tierra no ejidal. Por otro lado, los ejidos —más de mil—, cuentan con una superficie equivalente en valor a sólo un tercio de la superficie privada, y su característica es la pulverización de la parcela (Pág. 226). En Chiapas, y según lo declaró en 1982, al principio de su mandato, el propio gobernador, general Absalón Castellanos —hoy prisionero del EZLN— "no hay clase media", los ricos son muy ricos y los pobres, extremadamente pobres. Reconocer el hecho y hacer algo para superarlo no es necesariamente lo mismo; en 1987, la Academia Mexicana de Derechos Humanos publicó un informe (*Chiapas: cronología de un etnocidio reciente*) en el que caracterizó a la administración del general Castellanos como una de las más represivas y corruptas (Págs. 239 y 241).

En los años setenta, y en medio de esa polarización social, surgió un movimiento de organización de las comunidades agrarias e indígenas relativamente desligado del tradicional control del PRI: el Primer Congreso Indígena de Chiapas (1974) organizado por el obispo Samuel Ruiz; la Alianza Campesina 10 de Abril en 1976. Luego se for-

maron el Bloque Campesino de Chiapas, la Unión de Uniones Ejidales y Grupos Marginados de Chiapas; el Sindicato de Obreros Agrícolas "Miguel de la Cruz" o la Organización Campesina Emiliano Zapata. La agresividad de las comunidades en la defensa de sus intereses se ve en ciertas cifras: en los años setenta hubo 115 conflictos agrarios calificados como serios, de ellos 87 se debieron a disputas entre ejidatarios indígenas y ganaderos por el control de tierras comunales y ejidales (Pág. 234). El uso del ejército y la policía para controlar el choque entre propietarios y ejidatarios se hizo de uso corriente; al asesinato de campesinos, igualmente corriente, hay que añadir los asesinatos de terratenientes por campesinos; la quema y destrucción de poblados y alcaldías. Después de Veracruz, Chiapas era el estado donde se reportaba el mayor número de incidentes de violencia. En 1983, por ejemplo, la comunidad de Monte Líbano, en Ocosingo, envió una carta al Presidente quejándose de que en 1976, en 1979 y en 1982 la policía estatal había quemado su poblado. La carta concluía con una advertencia: los pobladores sabían que nadie iba a luchar por ellos contra caciques y terratenientes, pero ellos se consideraban preparados para llevar adelante una lucha abierta por recobrar sus tierras. Una advertencia muy similar hicieron ese mismo año los tzeltales de la Organización de los Pueblos Indígenas del Sudeste de México, en una proclama el estudio de la historia mexicana, decían les había enseñado que únicamente mediante la lucha y la organización podrían lograr un futuro diferente de vi-

da y lo iban a hacer (Pág. 240).

En 1989, el profesor Benjamin concluía que en Chiapas vivía en un "estado de sitio", donde la política era básicamente la política de la fuerza. Para 1987 el Ejército tenía en ese estado cuatro mil efectivos, hoy se calcula en 12 mil y seguramente irán en aumento.

El drama que se vive en Chiapas en estos días nos tomó a muchos por sorpresa, pero en realidad no debió de ser así: este estallido de violencia se venía anunciando desde hace tiempo. Guillermo Correa, en *Proceso*, advertía en 1983, haciéndose eco de las preocupaciones de la Iglesia católica, que Chiapas se encontraba "a un paso de la guerrilla" (12 de diciembre). Esto fue hace 10 años, justamente el tiempo que declararon unos de los líderes del EZLN que les llevó a organizarse. ¿Qué se hizo en ese tiempo por parte de la clase política chiapaneca y de la autoridad central? ¿Qué hizo el hoy secretario de Gobernación cuando estuvo al frente del gobierno de Chia-

pas? Por lo que se ve, no mucho, o no lo adecuado.

El momento no está para lamentar el tiempo perdido, sino para hacer proposiciones y actuar. Hay que actuar con decisión, inteligencia, sensibilidad y rapidez. El reto que ahora tiene México en general, y su clase política en particular, es más serio y profundo que aquel que llevó al gobierno a negociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Se trata de negociar en, circunstancias difíciles, un nuevo pacto político entre gobernantes y la mayoría de los gobernados para reconocerles su calidad de ciudadanos y redistribuir de manera menos injusta la carga del desarrollo económico, sin las irresponsabilidades, chicanas, corrupción y simulaciones que han hecho mundialmente famosa a la clase política mexicana ("la dictadura perfecta"). ¿Está la clase política en el gobierno y en la oposición a la altura del reto? Por el bien de ellos mismos, pero sobre todo, por el bien de la gran comunidad mexicana, ojalá sí.